

Criminalización social e “inseguridad”

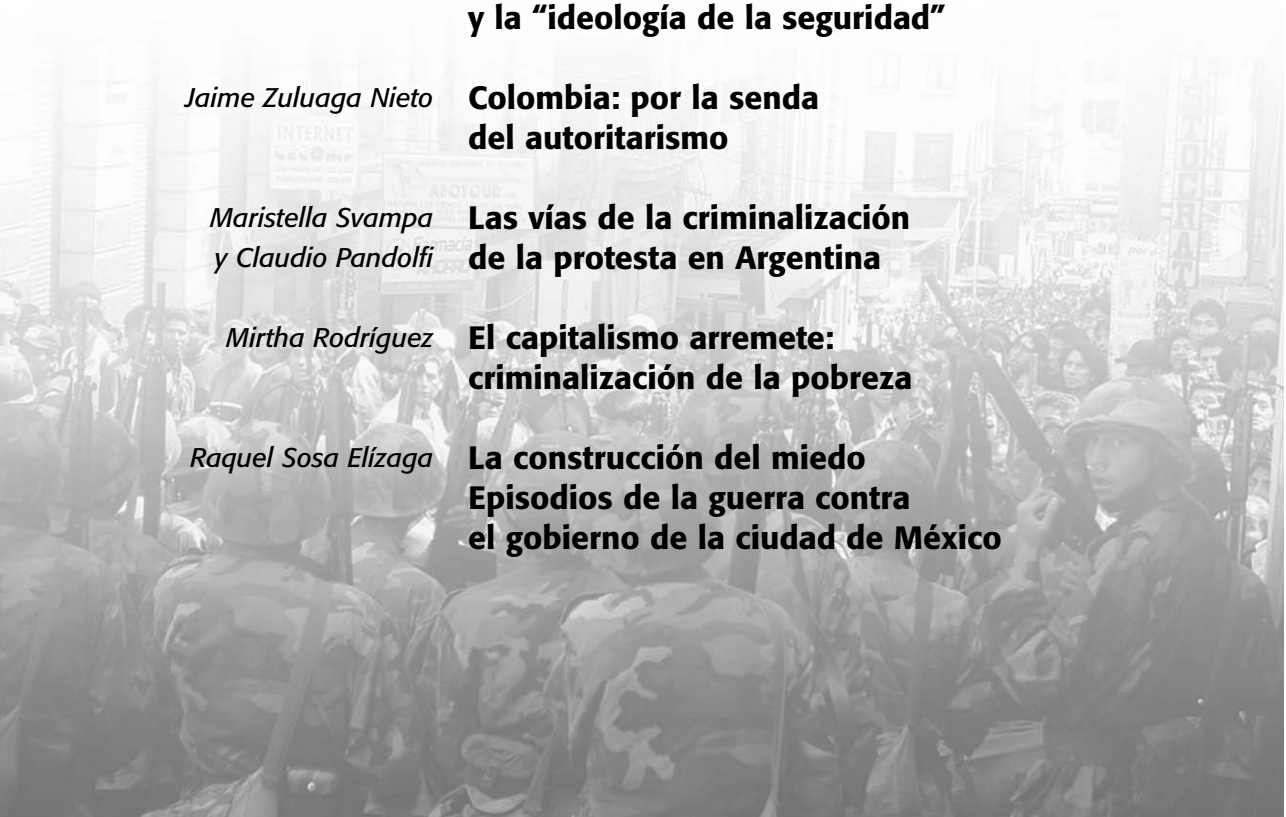
Susana Murillo **El Nuevo Pacto Social, la criminalización de los movimientos sociales y la “ideología de la seguridad”**

Jaime Zuluaga Nieto **Colombia: por la senda del autoritarismo**

Maristella Svampa y Claudio Pandolfi **Las vías de la criminalización de la protesta en Argentina**

Mirtha Rodríguez **El capitalismo arremete: criminalización de la pobreza**

Raquel Sosa Elízaga **La construcción del miedo. Episodios de la guerra contra el gobierno de la ciudad de México**



El Nuevo Pacto Social, la criminalización de los movimientos sociales y la “ideología de la seguridad”

Susana Murillo*

* *Profesora
e investigadora
en la Facultad
de Ciencias Sociales
de la Universidad
de Buenos Aires.*

El interrogante que guía estas líneas se refiere a cuáles son las condiciones de posibilidad que hacen a la creciente criminalización de los movimientos sociales y los actos de protesta en América Latina, y al mismo tiempo la convivencia de este fenómeno con otro de carácter acontecimental: se trata de la emergencia de marchas de protesta, “pacíficas”, “sin banderas políticas”, que reclaman “seguridad”. Estas no son denostadas o criminalizadas por los medios, sino mostradas en una secuencia sintagmática que propone de manera subliminal la razonabilidad de los reclamos. El objeto de estas exigencias (autodefinidas como “apolíticas”) son “los políticos” y en particular “el parlamento”. La finalidad de los reclamos es “mayor seguridad”. Así entonces nos encontramos con una situación de apariencia contradictoria: “la política” y “los políticos” son denostados, estos son con frecuencia acusados de corrupción y de convivencia con fuerzas paramilitares responsables de actos represivos o secuestros extorsivos, y el Estado es caracterizado de “ineficiente”. Sin

embargo, es a los políticos y al Estado a quienes se les hace el reclamo de mayor seguridad. Dos tipos de enunciados contradictorios conviven en las prácticas de una parte de las poblaciones, ambos en el nivel de la conciencia. Esa contradicción simplemente es el indicador de un proceso profundo y complejo de representaciones y prácticas llamado "ideología" (Hall, 1998; Zizek, 2003).

La hipótesis que subtiende estas páginas sostiene que tal proceso supone la construcción de un nuevo *pacto social* que implica un nuevo lugar del Estado y la ciudadanía. La fundamentación de tal hipótesis involucra un proceso complejo que en la corta duración remite al 11 de septiembre de 2001, momento en el cual se desata el "neoliberalismo de guerra" (González Casanova, 2002: 178-179); en la media duración remite a la estrategia política iniciada por la Comisión Trilateral respecto de América Latina en la década del setenta, en coincidencia con la mutación histórica que se estructura en ese momento a nivel mundial; y en la larga duración se sustenta en los fundamentos mismos del orden capitalista. Así, el fenómeno, variado según las regiones, demanda interrogarse por varios ejes y en tres temporalidades diversas.

Desde el pacto de sujeción a la constitución del pacto de unión

Desde la perspectiva de la larga duración, es posible afirmar que el Estado ha jugado en las sociedades capitalistas un lugar central en la gestión de la vida y la muerte de las poblaciones a través de la gestión de los espacios que constituyen sujetos, en tanto la constitución de la espacialidad hace a la construcción de la temporalidad y la posibilidad de proyectos sin los que no es posible hablar de humanidad. El Estado moderno no es sustancia sino un estado de las relaciones sociales que se expresa en discursos e instituciones instituyentes e instituidas a partir de complejos entramados de fuerzas. La acción del Estado moderno se sustentó jurídicamente a partir del siglo XVII en un "pacto de sujeción" que asumió el "estado de guerra" como un proceso latente de modo permanente que debía ser limitado a través de la fuerza. El siglo XVIII asistió al triunfo de las burguesías en buena parte de Europa y con ello se produjo una reconfiguración del pacto social. Con notable agudeza advertía Rousseau que "la fuerza no crea derechos", y de ahí entonces la necesidad de construir un *pacto de unión* cuya base radicase en el consenso a partir del *lazo moral* entre ciudadanos (se enmascaraba de ese modo el "estado de guerra" confusamente entrevisto por Hobbes). El pacto de unión supone, al menos en el nivel de la retórica, la soberanía popular, la igualdad de derechos, la separación de política y economía, y por ende el papel de árbitro neutral del Estado y su soberanía sobre el territorio. Ello supuso la construcción del ciudadano constituyente del cuerpo moral o voluntad colectiva.

“... el Estado ha jugado en las sociedades capitalistas un lugar central en la gestión de la vida y la muerte de las poblaciones a través de la gestión de los espacios que constituyen sujetos, en tanto la constitución de la espacialidad hace a la construcción de la temporalidad y la posibilidad de proyectos sin los que no es posible hablar de humanidad”

La construcción de este lazo moral implicó la gestión de la vida, pues el pacto de unión puso en evidencia la *cuestión social*, la cual no ha consistido sino en el abismo existente entre los derechos proclamados y la realidad efectiva que los deniega para grandes masas de la población mundial, aun cuando en la retórica de los organismos internacionales se los proclama. Lo social como red que sostiene y contiene las diferencias es una construcción que emerge precisamente de ese déficit (Donzelot, 1994). El conflicto social en sus variadas dimensiones sólo es un “síntoma” que expresa esa cuestión jamás resuelta y que parece irresoluble en términos del sistema. Los modos en que la cuestión social ha sido abordada para su corrección han variado con las correlaciones de fuerzas a lo largo de la historia del capitalismo. Sobre una matriz médica, la última parte del siglo XIX verá crecer prácticas de gobierno de sí mismos por parte de los sujetos. El diagrama de poder tendió entonces a la *gestión de la vida y la denegación de la muerte* (denegación¹ de la representación frente a los hechos, tal como lo muestra la cruenta historia del siglo XX).

El *pacto de unión* se reformula después de la Segunda Guerra Mundial (aunque con antecedentes luego de la crisis de 1929) a través de la alianza entre estados, empresas y sindicatos. Ello implicó una parcial integración de la fuerza de trabajo a ciertos derechos sociales, aunque no de modo homogéneo en todas las regiones; pero al mismo tiempo que gestionaba la vida, generó cuerpos colectivos resistentes que cuestionaron de diversos modos en las décadas del '50 y '60 el orden establecido. El concepto de ley universal e imperativo categórico subyacente a las diversas modalidades del pacto de unión producía no sólo obediencia sino también rebeldía en nombre de la ley trascendente e igual para todos. Ello ocurría en medio de un contexto geopolítico que incluía el conflicto entre la URSS y el mundo capitalista y entre países centrales y del Tercer Mundo.

Del consenso por terror al nuevo pacto basado en el consenso por apatía

En la mediana duración se advierte que los años '70 implican el comienzo de una reconfiguración de las relaciones de poder, y con ello de la totalidad de las relaciones sociales, políticas, culturales y económicas. Ello supuso la reconfiguración de las memorias históricas a nivel colectivo. Desde una *perspectiva sociotécnica* las amenazas cíclicas a la seguridad de las empresas fueron reducidas a través de cambios en los patrones de acumulación posibilitados por la denominada "tercera revolución industrial" que, a través de las nuevas tecnologías, permitió como nunca antes en la historia hacer frente a los tres obstáculos fundamentales para la acumulación de capitales: los límites de la fuerza de trabajo, energía y materias primas. Las nuevas tecnologías coadyuvaron a la consolidación de empresas transnacionales que exigen para la valorización de capitales la abolición de fronteras territoriales a fin de facilitar flujos de mercancías, fuerza de trabajo, organizaciones represivas e información, factor vital en un paradigma productivo en el cual el conocimiento es el insumo fundamental.

En ese marco, desde una *perspectiva política*, a fines de los '60 surge una estrategia tendiente a la constitución de un mundo más *interdependiente*. Se intenta así enfrentar la creciente bipolaridad, percibida como un peligro para EE.UU. En ese sentido, la pobreza en los países del Tercer Mundo comenzó a ser vista como peligrosa en tanto podía impulsar alianzas entre países poseedores de recursos estratégicos o con la URSS. Respecto de América Latina se afirmó que era necesario trazar una estrategia nueva para asegurar la "governabilidad". Esta, según el criterio de la Comisión Trilateral creada en 1973, se vería facilitada a partir de la construcción de un "consenso por apatía", en cuyo marco la existencia de poblaciones marginales podría disminuir las resistencias. "Un exceso de democracia significa un déficit en la gobernabilidad"². Para lograr la *governabilidad por apatía* era necesaria una "dolorosa" reconfiguración de los modelos políticos, culturales y de relaciones sociales³. Esta estrategia se inicia emblemáticamente en América Latina con el asesinato del presidente Allende⁴. Así, en los '70 la *cuestión social* es reformulada y el viejo pacto de unión, a la par que el Estado que lo sostuvo, comienza a ser desacreditado. Ello se consolida cuando tras el Consenso de Washington la dama de hierro sostiene: "lo social ha muerto". Las dictaduras que asolaron a América Latina pueden ser leídas en este contexto de transformaciones que tenían como uno de sus objetivos la liquidación de las soberanías –aunque a menudo débiles– de los Estados-nación en la región y la construcción de un *consenso por temor*.

Sin embargo, el nuevo paradigma sociotécnico requería de sujetos flexibles a los que la ilusión de autonomía indujese al consumo. Las dictaduras son un límite a los flujos de mercancías, personas e información. El consenso por temor no implica una adecuada economía de poder. De ese modo, en los '80 paulatinamente se produjo la emergencia

de las llamadas “democracias” en varios países del continente y el surgimiento de un *nuevo pacto social*. Ello comportó nuevas formas de control e intervención por parte de EE.UU.

Así en 1982 se creaba la Comisión Bipartita para Centroamérica, que se propuso estudiar los intereses de EE.UU. en la región y las amenazas a los mismos. En un reporte de la Comisión se sostenía que “cualquiera que sea el costo a corto plazo por actuar *ahora*, será mucho mejor que el de largo plazo” (Comisión Bipartita sobre Centroamérica, 1983: 2).



© Sebastián Hachler

El acento en la “urgencia”, el “ahora” y la “decisión” son significantes cuyo sentido se advertirá más tarde, pero que tienen peso ya en los ‘80. La Comisión emprendió una serie de viajes que la pusieron en contacto con hombres de todos los niveles en países como Venezuela o México. Este movimiento heredaba la visión trilateralista que aconsejaba evitar una conducta unilateral de los estados de países poseedores de recursos estratégicos y lograr la conducción colectiva de las relaciones internacionales por parte de los países centrales con hegemonía de EE.UU. Para ello era necesario recrear las instituciones nacionales e internacionales y crear otras nuevas.

Se reinventaba *la política* al tiempo que se deshacía *lo social*. La reinención valorizaba el lugar que ciertos “hombres clave” (líderes locales ligados al *establishment* internacional que comenzaba a conformar un comando mundial) podían jugar en los países llamados “emergentes”. A partir de *lazos informales* ellos debían lograr transformaciones institucionales rápidas de acuerdo a las propuestas formuladas por el Consenso de Washington. Los estados de los países “pobres” debían recrearse adoptando dos funciones básicas: en primer lugar, facilitar las acciones de las empresas multinacionales a través de normativas jurídicas y acciones acordes al carácter flexible e integrado del nuevo paradigma productivo. La segunda función era la de policía local respecto de las poblaciones expulsadas de puestos de trabajo urbanos o rurales como consecuencia de las nuevas políticas. Las democracias de los ‘90 fueron el intento de consensuar este *nuevo pacto social* que debía aunar el uso de la violencia directa extraeconómica del viejo *pacto de sujeción* con el consenso moral del *pacto de unión*. Así, el nuevo pacto

se basó en el *consenso por apatía* que se constituyó poco a poco como base de unas democracias sustentadas en el desinterés por la política, el cual tiene su fundamento más profundo en el terror asentado en el hecho de que desde los '70 el Estado se había centrado en *gestionar la muerte*. Este consenso se constituye a través de varias capas arqueológicas, que remiten a un pasado presente y vivo aunque a menudo desconocido para los sujetos. Esas capas habitan al mismo tiempo la memoria, y cada una de ellas se resignifica en momentos diversos o simultáneos; lo central es la materialidad de sus efectos en los cuerpos. Enunciaremos estas capas, pero su orden de exposición es lógico más que cronológico.

Represión armada, tortura y desaparición de personas conforman una primera capa, sostenida en las dictaduras militares y resignificada particularmente a partir de 2001 con la emergencia del "neoliberalismo de guerra" (González Casanova, 2002). Este, entre otros, fue un elemento central para modificar la cultura y los hábitos en la población. El terror se resignifica en situaciones de incertidumbre existencial tales como la falta de trabajo, la expulsión de la tierra, o en los escenarios televisivos en los que la violencia es el sentido que se constituye en la articulación de significantes. Esa primera capa de la memoria colectiva genera un profundo temor a todo lo que pueda caracterizarse como "actividad política", pues ella connota peligro de muerte. Un segundo tiempo lógico de este proceso consiste en la denegación del genocidio por el horror que este produce, particularmente por la falta de cuerpos. La muerte y su *denegación* parecen operar sobre la memoria colectiva, produciendo el rechazo de todo aquello que asociativamente se vincule con ella. Así se borra la memoria histórica y se liga asociativamente al horror, de modo inconsciente, la actividad política. De ese modo, en muchos sujetos a la hora de efectuar entrevistas surge la desvalorización de la política y "los políticos" (Murillo, 2003). Un tercer tiempo lógico-histórico lo constituyen las democracias de los '80 y las frustraciones que ellas engendraron. En el caso de Argentina el terror fue reagu-

"Represión armada, tortura y desaparición de personas conforman una primera capa, sostenida en las dictaduras militares y resignificada particularmente a partir de 2001 con la emergencia del 'neoliberalismo de guerra'"

dizado por la hiperinflación que resignificó los terrores del genocidio por la sensación de vulnerabilidad que produjo en los sujetos. Todo ello reagudizó el rechazo a las actividades políticas y a los “políticos”, quienes comenzaron a formar una “clase”. Este proceso inconsciente opera como soporte de una cuarta capa de la memoria: el show mediático de los ‘90 que, unido al feroz socavamiento de lazos encarnado en el tráfico de drogas, fortaleció la denegación de la muerte (ahora por hambre, carencia de trabajo, expulsión y persecución de campesinos, falta de cobertura social) en la promesa maníaca de una fiesta perenne, encarnada en la imagen de personajes ubuescos⁵ a quienes, obscuramente, muchos deseaban parecerse como forma de rescatarse de la nada y del horror. El “encanallecimiento cultural” y la “norteamericanización de la cultura” (Anderson, 2000) que florecieron en los ‘90 brindaron figuras de políticos, artistas y empresarios que se ofrecieron como modelos de una completud parmenídea que encarnaba lo otro de la muerte que se denegaba. Este proceso a la vez inducía al consumo de cualquier chatarra importada por las megaempresas, consumo que imaginariamente colocaba a los sujetos en el lugar de la completud que salva de la muerte. Con ello la apertura de las importaciones encontraba su camino de apoyo en una ciudadanía que consensuaba medidas tácitamente. La alianza estratégica entre el “mundo del espectáculo”, el de la política y el de la empresa, facilitó la acción de esos “hombres clave” que los trilateralistas habían pensado y que ahora organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI utilizaban para realizar las transformaciones institucionales.

Así se instaura en varios países de la región (Argentina, Perú) un nuevo modelo de Estado y de ejercicio de la política caracterizado como “neodecisionismo” que implicó efectos que permitieron sustentar un balance entre dos lógicas contradictorias: “legitimación” y “represión” (Bosoer y Leiras, 1999). Las prácticas neodecisionistas de los ‘90 consolidaron el *consenso por apatía* hacia la ejecución de políticas que saquearon las riquezas en Latinoamérica. Sus diversos puntos de apoyo tuvieron un eje: *la urgencia* y *la excepcionalidad* que exige la suspensión de procesos de deliberación para el consenso, encarnados tradicionalmente en el parlamento y el debate ciudadano. Ello supone el inmediato pasaje al acto y comporta la delegación en “técnicos” del proceso de reflexión para la toma de decisiones. Los “expertos” siempre están representados en figuras emblemáticas cuya marca es la “eficacia”, el “éxito” que remite a la completud que salva de la carencia. Sin embargo la completud no existe, y la muerte denegada que transformaba cualquier relación en mercancía afloró ya no como representación de ajenedad sino como ecuación insoslayable en el hambre, las enfermedades, la pérdida de la soberanía alimentaria, la concentración de la tierra —ahora mayoritariamente en manos de extranjeros— y la consiguiente expulsión de miles de trabajadores y pequeños propietarios de tierras.

Desde el consenso por apatía al consenso en demanda de “seguridad”

El año 2001 sancionó ya a nivel regional e internacional las grietas de las estrategias trazadas en los '70. Tal como lo viera Aristóteles en la *Política*, la búsqueda de la ganancia por sí misma es de carácter infinito, pero ese infinito desmembra en pedazos a la *polis*. Desde comienzos de los '90 empezaban a estallar como hormigueros luchas dispersas contra los ajustes y privatizaciones (Seoane y Algranati, 2002). El 2001 marca, junto a la visibilidad de los efectos destructivos del modelo económico, el inicio del fin de la legitimidad política del nuevo pacto social basado en el consenso por apatía (lo cual no implica, sin embargo, que la apatía haya sido desterrada). La tan deseada gobernabilidad hizo aguas en todas partes del continente, y ello se hizo visible en la profundización de las protestas sociales y, en 2002, en “la agudización de ciertas modalidades confrontativas en desmedro de las protestas demostrativas” (Seoane y Taddei, 2003: 67), así como en triunfos electorales de coaliciones que intentaron en algunos países confrontar, aun con limitaciones, con el modelo neoliberal. Las figuras que habían sido cargadas de valor simbólico en tanto ofrecían la ilusión de salvación, cuando el paraíso prometido se evaporó, se trocaron en la encarnación de todos los padecimientos.

Entonces el rechazo a la “política” fue asociado con figuras clave del proceso democrático.

La articulación subjetiva entre “política”/“políticos”/“corrupción” remite a algunos “hombres clave” de los '90 y expresa los efectos de las capas arqueológicas de la memoria sustentadas en diversas formas del terror y su denegación, procesos que fragmentan la memoria colectiva y con ello la posibilidad de pensar al mundo como tarea en la que todos estamos involucrados, al tiempo que construyen una vivencia pasiva del tiempo en la que un ángel salvífico podría determinar el curso de las cosas. Se trata de una forma postmoderna del pensamiento mágico que obvia las relaciones históricas y los procesos en su complejidad, sólo abreva en algunos efectos de dichos procesos y los articula de modo que otra vez se deposita la esperanza de salvación en una figura que pueda obturar de modo inmediato todas las faltas.

Es sobre esta peligrosa ilusión que en 2004 se asientan los “reclamos apolíticos de seguridad” a “los políticos” objeto de desprecio. Es sobre esta compleja trama que se asienta la contradicción enunciada en el primer párrafo de este texto. Así, los mismos sectores devastados por el neoliberalismo reclaman “seguridad” a las mismas instituciones que repudian. *El núcleo de sus reclamos es el terror* que reconoce diversas fuentes: el genocidio, la desocupación, la precarización laboral, la oferta de objetos de consumo y de un mundo de completud al que no se tiene acceso, la inseguridad construida por empresas que lucran con la venta de inseguridad, la flexibilidad constante de una vida



© Sebastián Hacher

que no ofrece espacio donde apoyarse, la sensación creciente de ser prescindible en lo laboral, en lo político, en lo afectivo, debida a la desactivación de redes sociales. Todo ello genera una profunda incertidumbre antropológica que genera angustia, la que a su vez produce fuertes sentimientos de violencia. La violencia social introyectada es a menudo denegada y volcada contra el sí mismo (aumento del número de suicidios y adicciones diversas) o contra los otros en los que la causa del terror es reificada. Así el pobre, el joven y el no-blanco emergen como los posibles causantes de todos los males, y los pedidos de justicia son acompañados por el reclamo de baja en la edad de imputabilidad y de diversas medidas que tiendan a la mano dura. Las diatribas contra organismos de derechos humanos, el pedido de voto calificado, el más abierto racismo, se expresan en algunos líderes de esas marchas "apolíticas" promovidas en algunos casos por figuras vinculadas a represores de la década del '70. Sin embargo, en muchos ciu-

[AÑO V N° 14 MAYO-AGOSTO 2004]

dadanos, el terror obtura las mediaciones reflexivas y el alma pide a gritos "tolerancia cero" mediada por una ley que, establecida sin deliberaciones –sólo basada en la exigencia de "la gente"–, opere sobre los otros *la muerte propia que se desea otra vez denegar*. La angustia que revela tal violencia verbal o física –que reclama *legalizar la represión y que no vacila en denunciar anónimamente* a los sujetos en los que tal tensión se deifica– se sostiene además en la caída de unas normativas universales y su reemplazo por una legalidad basada en la urgencia y el pragmatismo. Buena parte de la población se involucra también en operaciones de vigilancia y denuncia de los posibles delincuentes que generan inseguridad (Zuluaga Nieto, 2003). Esta es retroalimentada desde los medios de comunicación que han venido a ocupar en buena medida el lugar de los dispositivos disciplinarios en su papel de intervención moral en la vida doméstica. Ellos conforman una nueva manera de intervención extralegal, que ante situaciones conmocionantes constituye rápidamente un "consenso espontáneo" (Foucault, 1991). La explicación de la relación entre la exposición de violencia y su influencia subjetiva no es unánime, pero investigaciones empíricas en el marco de la *teoría del cultivo* ponen el acento en su influencia en la percepción de la sociedad más que en la alteración de comportamientos, siendo la variable más destacada la forma de presentación de la violencia (García Silberman y Ramos Lira, 1998). La exposición de casos de violencia conmocionante tiende a reproducir la experiencia vital del espectáculo simplificando la estructura narrativa en un esquema polar bueno-malo (Fernández Pedemonte, 2001). Esos casos funcionan como alarmas sociales y señales de largada de olas de violencia mediática condicionantes del sistema político (Michaud, 1989; Gaarland, 1996).

Estos procesos subjetivos atraviesan a buena parte de la población en Latinoamérica y vienen a transformarse así en el sostén sobre el que se legitima un *nuevo pacto social* que supone:

- 1) La *explícita diferencia entre países ricos y pobres*, así como la "minoración" manifiesta de los estados de estos últimos (Banco Mundial, 1999: 1) y, para el caso de América Latina, la clara hegemonía económica, cultural y militar de EE.UU.
- 2) La *pérdida de la soberanía estatal de los "países pobres"*, de modo tal que en ellos la misma es delegada explícitamente en organismos internacionales que funcionan como un verdadero comando mundial a través del cual condicionan las políticas locales mediante la intervención de sus "hombres clave".
- 3) La *abolición de la tradicional distinción entre economía y política* y la desaparición, de modo explícito, del carácter neutral del Estado, el cual ahora es de modo manifiesto un facilitador de las megaempresas (Banco Mundial, 1997).

“Así el pobre, el joven y el no-blanco emergen como los posibles causantes de todos los males, y los pedidos de justicia son acompañados por el reclamo de baja en la edad de imputabilidad y de diversas medidas que tiendan a la mano dura”

4) La función local del Estado como *policía de gestión del riesgo social*, lo cual implica abandonar las tácticas individualizantes de poder y monitorear grupos que presenten grados diversos de peligro para el accionar del mercado (Banco Mundial, 2000). Aquellos que realizan acciones que atacan lugares o posiciones neurálgicas para las megaempresas son reprimidos sin claudicación. Pero esta represión se lleva a cabo en un sistema “democrático” que entre tanto deja *áreas liberadas* donde parece imperar una cierta *tolerancia*. Ello comporta sobre todo a nivel urbano una fuerte “despacificación” de los vínculos sociales que retroalimenta la incertidumbre de los sujetos, y desde allí el pedido de mano dura hacia los grupos peligrosos para el comando mundial. La gestión del riesgo supone la intervención directa que llega hasta la represión manifiesta sólo cuando los grupos de riesgo afectan centros neurálgicos para las empresas transnacionales⁶. Esta función de policía local es complementaria de la policía mundial, que actúa como un verdadero ejército imperial cuando en algún lugar surgen conflictos peligrosos para el orden económico internacional.

5) La *caída del concepto de ley universal y el resurgimiento del positivismo jurídico* dan lugar a la flexibilidad y el pragmatismo de las leyes (Banco Mundial, 1999/2000), lo cual posibilita las innovaciones necesarias al mercado y la rápida intervención represiva cuando hay riesgo para los núcleos del poder.

Todo ello comporta un profundo proceso de “despacificación social” que supone tres dimensiones de violencia física y/o simbólica: la estructural del desempleo, la estatal intermitente y la de los vínculos cotidianos (Wacquant, 2001). En ese marco es que puede leerse el afianzamiento de medidas represivas por parte de algunos estados, legitimadas por una parte de la ciudadanía que, sumida en la inmediatez, demanda medidas urgentes de seguridad. Estas exigencias se extreman, retroalimentadas en los medios masivos, cuando los

gobiernos intentan tomar medidas que suponen algún grado de independencia respecto de la política hegemónica de EE.UU. o que afectan intereses de las megaempresas. La "seguridad" se transforma así en una demanda infinita por parte de la ciudadanía que viene a "consensuar" una agenda impuesta por los organismos internacionales que, fundamentalmente desde septiembre de 2001, han declarado una guerra en nombre de la paz y la libertad.

En nuestro continente, la encarnación del enemigo se reifica en la criminalización de los pobres, los no-blancos y los jóvenes; tal reificación se asienta en la incertidumbre creada para todos por un modelo económico basado en la eterna flexibilidad de objetos, procesos y sujetos.

Bibliografía

Anderson, Perry 2000 (1998) *Los orígenes de la posmodernidad* (Buenos Aires: Anagrama).

Banco Mundial 2000 *Gestión de Riesgo Social en Argentina*. Informe elaborado por el grupo de protección Social del Departamento de Desarrollo Humano, Oficina Regional para América Latina y El Caribe, 10 de enero.

Banco Mundial 1999/2000 *Informe sobre el desarrollo mundial* (Washington DC).

Banco mundial 1999 *Informe sobre el desarrollo mundial. El conocimiento al servicio del desarrollo 1998/1999* (Washington DC).

Banco Mundial 1997 *El estado en un mundo en transformación* (Washington DC).

Bosoer, Fabián y Leiras, Santiago 1999 "Posguerra fría, 'neodecisionismo' y nueva fase del capitalismo: el alegato del Príncipe-gobernante en el escenario global de los '90", en Borón, Atilio et al. *Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina* (Buenos Aires: EUDEBA/CLACSO).

Comisión Bipartita sobre Centroamérica 1983 *Informe de la Comisión Bipartita sobre Centroamérica* (Buenos Aires: Atlántida) [Prefacio de Henry Kissinger].

Corbalán, María Alejandra 2003 *El Banco Mundial. Intervención y disciplinamiento. El caso argentino, enseñanzas para América Latina* (Buenos Aires: Biblos).

Donzelot, Jacques 1994 *L'invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques* (Paris: Éditions du Seuil).

Fernández Pedemonte, Damián 2001 *La Violencia del relato: discurso periodístico y casos policiales* (Buenos Aires: La Crujía).

Foucault, Michel 1991(1978) "Nuevo orden interior y control social", en Foucault, Michel *Saber y Verdad* (Madrid: Editorial La Piqueta).

Gaarlant, David 1996 "The Limits of the Sovereign State. Strategies of Crime Control in Contemporary Society", en *The British Journal of Criminology* (London) Vol. 36, N° 4, 445-471.

García Silberman, Sarah y Ramos Lira, Luciana 1998 *Medios de comunicación y violencia* (México: Fondo de Cultura Económica).

González Casanova, Pablo 2002 "Democracia, liberación y socialismo: tres alternativas en una", en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 8, septiembre.

Hall, Stuart 1998 "El problema de la ideología marxismo sin garantías", en *Doxa* (Buenos Aires) N° 18.

Michaud, Yves 1989 *Violencia y Política* (Buenos Aires: Sudamericana).

Murillo, Susana (coord.) 2003 *Sujetos a la incertidumbre. Transformaciones sociales y construcción de subjetividad en la Buenos Aires actual* (Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación).

Seoane, José y Algranati, Clara 2002 "Los movimientos sociales en América Latina. Entre las convergencias y el neoliberalismo armado", en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 8, septiembre.

Seoane, José y Taddei, Emilio 2003 "Movimientos sociales, conflicto y cambios políticos en América Latina", en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, enero.

Wacquant, Loïc 2001 *Parias urbanos. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio* (Buenos Aires: Manantial).

Zizek, Slavoj 2003 (1994) *Ideología. Un mapa de la cuestión* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

Zuluaga Nieto, Jaime 2003 "Colombia: entre la democracia y el autoritarismo", en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, enero.

Notas

1 Denegación se usa en todo el artículo en el sentido de negación de existencia de una cosa, proceso o atributo.

2 "La gobernabilidad de la democracia", informe del Grupo Trilateral, citado en Corbalán (2003: 42).

3 Los conceptos de la Comisión Trilateral alimentarían las políticas del Banco Mundial para América Latina.

4 "Asesinato" que no casualmente ahora es relatado como "suicidio", con todo el peso que esta palabra conlleva en la descripción de un proceso histórico como el de Chile y América Latina en esos años.

5 Se toma aquí el término "ubuesco" en el sentido de Michel Foucault: como lo ridículo utilizado como herramienta de poder; lo ridículo o el ridículo forman parte de una farsa que, por increíble y absurda, profundiza la impunidad de quien ejerce el poder.

6 Ello es visible no sólo a nivel urbano, sino en la represión a campesinos que intentan, como por ejemplo los Mapuches, recuperar tierras apropiadas por megasempresas.